

PALABRAS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DE LA CEPAL,
SR. JOSE ANTONIO OCAMPO,
EN LA CONFERENCIA HEMISFÉRICA SOBRE MIGRACIÓN INTERNACIONAL:
DERECHOS HUMANOS Y TRATA DE PERSONAS EN LAS AMÉRICAS

Santiago de Chile, 20 de noviembre de 2002

Quiero agradecer, en primer término, a todos ustedes y, en especial al Ministro Secretario General de Gobierno, su participación en esta Conferencia que la CEPAL ha organizado conjuntamente con la Organización Internacional para las Migraciones y la colaboración y auspicio de un amplio grupo de organismos internacionales. Ella constituye un esfuerzo para avanzar en los acuerdos alcanzados en la reciente Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, realizada en la República Dominicana, así como en la Tercera Cumbre de las Américas, celebrada en Canadá en 2001, en la que se estableció un conjunto de metas destinadas a promover los derechos humanos de los migrantes. Es, asimismo, una contribución emblemática al proceso de consolidación de los objetivos de la Declaración del Milenio, en donde se renovaron y fortalecieron los mandatos del Sistema de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y la búsqueda de un orden global más equitativo.

La migración internacional y los derechos humanos han ocupado un lugar destacado en los trabajos y propuestas de la CEPAL de los últimos años. Así lo ponen de manifiesto tanto el documento "Equidad, desarrollo y ciudadanía" del 2000 como nuestro más reciente trabajo "Globalización y Desarrollo", uno de cuyos capítulos, que está a disposición de todos ustedes, abordó el tema de la migración internacional en el marco de la globalización. Por otra parte, la CEPAL estableció en noviembre de 2001, la Unidad de Derechos Humanos y suscribió un acuerdo de cooperación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que se materializó con la designación de un Representante Regional de dicha Oficina, ubicado en la sede de la CEPAL.

Como lo he manifestado en múltiples ocasiones, la visión integral del desarrollo ha sido la fuerza unificadora del pensamiento de la CEPAL a lo largo de su historia. En "Equidad, Desarrollo y Ciudadanía" resaltamos que el desarrollo, así entendido, está ligado indisolublemente a los derechos humanos, en su doble dimensión de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales y, por ende, a la vigencia de los principios de igualdad, solidaridad y no discriminación que ellos encarnan.

La experiencia migratoria mundial y regional entrega lecciones de gran importancia. Sabemos que la migración es una poderosa fuerza de cambio social y de interacción cultural. En el período transcurrido entre las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX, los movimientos migratorios complementaron los flujos de comercio e inversiones. La emigración europea hacia América y Oceanía fue un factor esencial de la convergencia económica entre

Europa y dichos territorios. Los flujos migratorios incluyeron también un importante contingente de mano de obra asiática, especialmente de culíes chinos e hindúes, transportados hacia plantaciones tropicales de distintas regiones del mundo. Como lo señalara el gran economista caribeño, Sir Arthur Lewis, este patrón dual de migraciones internacionales fue uno de los factores que determinó la conformación de un orden económico internacional desigual.

Nuestra región fue también escenario de vigorosos movimientos migratorios en aquellos años. Sin desconocer conflictos, los fracasos de diversas iniciativas de promoción de la inmigración y algunas expresiones de discriminación, predominó la idea de que los migrantes traían conocimientos, capital y pautas de conducta funcionales al progreso. En general, los inmigrantes fueron artífices de la pujanza socioeconómica de los países que los recibieron y protagonistas de una intensa movilidad social.

Si bien se afirma que la época actual es "la era de la migración", la proporción de la población mundial que puede calificarse como migrante internacional es exigua (inferior al 3%) y significativamente inferior a la alcanzada a comienzos del siglo XX. Más aún, con sobradas razones puede decirse que la globalización actual se caracteriza por la marcada asimetría entre la elevada movilidad de los capitales y la restricción de los desplazamientos internacionales de la mano de obra, especialmente la menos calificada.

La complejidad actual de la migración no radica exclusivamente en su magnitud, sino en sus características. La coexistencia de estímulos y de barreras para migrar refleja los diferentes efectos y significados que la migración tiene en los países emisores y receptores. Su impacto sobre los mercados laborales, la productividad, el consumo y los salarios son distintos. Para los receptores, éste depende tanto de sus necesidades de mano de obra como de la integración de los inmigrantes a sus sociedades. Para los países de origen responde, por una parte, a los beneficios que obtienen sus emigrados (entre ellos, las remesas) y, por otra, al drenaje selectivo de personal calificado, producto de las políticas migratorias de los países desarrollados.

Visto como un todo, la migración sigue siendo una fuente de oportunidades para quienes logran migrar y una poderosa fuerza de interacción cultural, pero también de expresiones xenofóbicas y de tensiones distributivas. Las marcadas asimetrías entre la movilidad del capital y de la mano de obra dan origen a sesgos en la distribución del ingreso que perjudican a los factores menos móviles, especialmente la mano de obra menos calificada. Las restricciones a la movilidad de la mano de obra debilita uno de los mecanismos que ha desempeñado, hasta nuestros días, un papel fundamental en la convergencia de ingresos entre los países industrializados. Así mismo, la mayor movilidad de mano de obra calificada no solo drena el capital humano de los países en desarrollo, sino que tiende a acentuar las desigualdades de ingreso en función de la calificación.

Sin duda, el análisis en detalle de los impactos de la migración se complica aún más por la existencia de una cantidad no bien determinada de migrantes que, por estar irregularmente en el país en que se encuentran, se califican como indocumentados. Estas circunstancias impiden reunir evidencias empíricas claras y construir teorías sólidas que permitan comprender los distintos significados de la migración y alimentar políticas sobre la materia.

Sin embargo sabemos que en los últimos decenios se multiplicó el número de países emisores de migrantes y se diversificaron las formas de movilidad (en términos de duración de la estadía, frecuencia de los traslados y modalidades de residencia). Así, los desplazamientos originados en América Latina y el Caribe hacia Estados Unidos, Canadá, Europa y, en menor medida, Australia y Japón, se incrementaron significativamente, sobrepasando en magnitud a los flujos intrarregionales. En el año 2000, en los países industrializados vivían más de 17 millones de personas nacidas en nuestra región, mientras que sólo 2.5 millones de migrantes latinoamericanos y caribeños residían en otros países de la región. En el caso de los flujos intrarregionales, dos de los polos de atracción de migrantes en décadas anteriores, Argentina y Venezuela, se han debilitado, aunque han surgido otros, generalmente de menor tamaño relativo, como Costa Rica, Chile y República Dominicana.

A raíz de estas tendencias, las remesas se han constituido en una fuente fundamental de ingresos para varias economías latinoamericanas y caribeñas. Con 7,000 millones de dólares de ingresos, México es el principal receptor de remesas en la región y el segundo en el mundo después de la India, aun cuando su incidencia en la economía es relativamente baja (1.1% del PIB). Mucho mayor es el impacto en economías como El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Ecuador y Jamaica, en donde las remesas representan más del 8% del PIB. Por otra parte, la población latinoamericana y caribeña ha contribuido a la diversidad étnica, religiosa y cultural de los países industrializados, pero también ha enfrentado vulnerabilidades propias de la migración contemporánea. En particular, el tráfico, la trata, la indocumentación y la deportación, son hechos comunes de la migración contemporánea y se han convertido en una fuente de enriquecimiento a costa del engaño y la explotación de las personas que desean ejercer su derecho a migrar.

La protección de los derechos humanos fundamentales de los migrantes en los países de destino debe ser, por lo tanto, una prioridad para todos los Estados y en tal sentido, los instrumentos del derecho internacional resultan fundamentales. Sin embargo, si bien las normas y su aplicación rigurosa es condición necesaria, no son suficientes para progresar en el cumplimiento de los derechos de los migrantes. La transnacionalización y las nuevas formas de ciudadanía imponen retos inéditos a la globalización contemporánea. Entre otros aspectos, exigen reconocer el papel que desempeñan las comunidades transnacionales de migrantes y alentar una intervención consciente de la sociedad civil.

La CEPAL postula que el uso de procedimientos policiales en este campo debe reservarse sólo para combatir los delitos en que incurren las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de migrantes y a la trata de personas. Las acciones punitivas no deben ejercer efectos adversos en las redes y comunidades de migrantes. Es indispensable, entonces, tomar las medidas necesarias para no penalizar a las víctimas y distinguir los ilícitos mencionados de los fenómenos de indocumentación.

La creación de diversos espacios de diálogo e intercambio de información, como la Conferencia Regional de Migración y la Conferencia Sudamericana sobre Migraciones, abre

oportunidades para avanzar una gobernabilidad compartida de la migración internacional. La aceptación política de la posibilidad y legitimidad de la búsqueda de consensos intergubernamentales sobre la normatividad y el tratamiento que cabe otorgar a la migración implica recuperar una visión objetiva sobre el fenómeno y aspirar a que las políticas que se definan en este campo se vinculen estrechamente con las estrategias de desarrollo y el respeto por los derechos de los migrantes.

La concertación de acuerdos que amplíen la movilidad de la mano de obra y fortalezcan la gobernabilidad de la migración debe ser una de las prioridades de la agenda internacional. **Su objetivo final debe ser la adopción de un acuerdo mundial sobre políticas migratorias.** En ese camino, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1990 y ya ratificada por 19 países, 6 de ellos latinoamericanos y caribeños (Belice, Bolivia, Colombia, Ecuador, México y Uruguay), debe ser ratificada por un creciente número de naciones, ya que brinda a los Estados un instrumento legal que facilita la articulación de legislaciones nacionales uniformes sobre la materia.

Es igualmente fundamental combatir decididamente la discriminación y la xenofobia en todas sus formas, mediante la ratificación de los instrumentos internacionales correspondientes y el cumplimiento del Plan de Acción suscrito en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, realizada en Durban, Sudáfrica, en 2001. Los gobiernos de los países receptores deben adoptar medidas que apunten a la plena incorporación de los inmigrantes a las sociedades de destino. Éste es, de hecho, un requisito esencial para garantizar la cohesión social en las sociedades receptoras. Mecanismos como la educación pública y los servicios de protección social son una forma de contribuir a la ampliación de sus derechos económicos y sociales. La otra cara del proceso de integración es la exigencia de que los inmigrantes respeten la cultura que los acoge y acaten plenamente las normas jurídicas del país receptor.

Los países de origen de la migración pueden beneficiarse a través de diversos mecanismos. En primer lugar, mediante las remesas, que como he mencionado, constituyen flujos significativos de recursos para muchos países de la región. La reducción de los costos de transferencia, la promoción de programas de apoyo que los emigrantes pueden ofrecer a sus comunidades de origen y el uso productivo de estos recursos son algunas de las acciones que se deben promover. El empleo de vínculos con los emigrados permitirá, entre otras, aprovechar su preparación científica, profesional y empresarial, así como crear un mercado potencial de productos idiosincrásicos. Así mismo, es vital que los países de origen reconozcan el derecho de los emigrantes a participar en los procesos políticos de sus países de origen. La ampliación de los compromisos de movilidad temporal de trabajadores en el marco del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de la OMC es igualmente importante. En particular, deben suscribirse mayores compromisos por parte de los países industrializados en materia de servicios que supongan un uso intensivo de mano de obra poco calificada, ámbito en el que los países en desarrollo pueden tener ventajas comparativas.

La migración debe formar parte integral de la agenda hemisférica, de los acuerdos multilaterales entre América Latina y el Caribe y la Unión Europea, y de los diversos procesos de integración regional. Existe, además, una amplia gama de negociaciones y convenios bilaterales que pueden contribuir al propósito de ampliar las posibilidades de migración internacional. Entre ellos se destacan las negociaciones en curso entre México y los Estados Unidos y el convenio suscrito en agosto del presente año entre Perú y Chile, que permitirá a los trabajadores migrantes trasladar sus aportes a la seguridad social a su país de origen. Todos estos acuerdos, ya sean multilaterales o bilaterales, deben incrementar la movilidad temporal y permanente de los trabajadores y avanzar en otras áreas, estrechamente vinculadas a la migración, como la continuidad de los beneficios de la seguridad social y el reconocimiento de estudios y calificaciones personales.

A todos nos une el afán de avanzar en la búsqueda de mecanismos de diálogo e intercambio de experiencias que permitan un trato más digno a las personas migrantes, haciendo de la migración internacional un proceso que fortalezca las buenas relaciones de vecindad y de cooperación en nuestro común territorio americano. Este propósito exige la más amplia participación, y es por ello que esta Conferencia se concibió como una tarea conjunta de los diversos sectores: funcionarios gubernamentales, expertos, representantes de organizaciones de la sociedad civil y de organismos internacionales.

Por último, deseo resaltar la importancia del evento organizado por la sociedad civil que está sesionando paralelamente y en el cual se analiza y discute en profundidad el tema objeto de esta Conferencia, cuyas principales conclusiones conoceremos al final de ésta.

Agradezco a todos ustedes su colaboración, seguro de la importancia de los resultados de esta Conferencia.